

Campaña hace que lectores se involucren en política obrera

POR EMMA JOHNSON

Está progresando la campaña para ampliar el número de lectores a largo plazo del *Militante* y hacer llegar los libros sobre política revolucionaria de la clase obrera a las manos de los trabajadores. En la segunda semana, 202 personas han renovado su suscripción o han obtenido una nueva de seis meses o más. El objetivo es conseguir 575 suscripciones para el 23 de marzo. Esta semana Miami fue la primer área que aumentó su cuota.

Los partidarios del *Militante* están llevando el periódico a las líneas de piquetes, las protestas sociales y eventos políticos para participar en las discusiones políticas y ganar nuevos lectores. Y están llevando estas experiencias a los lectores yendo de casa en casa para hablar de la política obrera e instarlos a que renueven su suscripción.

Partidarios del periódico en Nueva York participaron en un evento el 24 de febrero en apoyo al movimiento de protesta que provocó la caída del gobierno

Sigue en la página 11

Campaña de renovación Feb. 8 - Marzo 23 (semana 2)

País	Cuota	Ventas	%
ESTADOS UNIDOS			
San Francisco	40	21	53%
Miami*	25	13	52%
Chicago	37	15	41%
Seattle	37	15	41%
Atlanta	35	14	40%
Des Moines	30	12	40%
Lincoln	5	2	40%
Houston	25	9	36%
Omaha	30	9	30%
Filadelfia	30	9	30%
Los Angeles	35	10	29%
Nueva York	90	21	29%
Boston	13	3	23%
Washington	18	4	22%
Minneapolis	35	5	14%
Total EE.UU.	485	162	33%
PRESOS	8	5	63%
REINO UNIDO			
Londres	30	7	23%
Manchester	20	6	30%
Total Reino Unido	50	13	26%
CANADA	32	7	22%
NUEVA ZELANDA	18	8	44%
AUSTRALIA	20	7	35%
Total	613	202	35%
Debe ser	575	192	33%

Puerto Rico: deuda, crisis social golpea a colonia EUA

POR SETH GALINSKY

La situación de Puerto Rico como colonia del imperialismo norteamericano está ampliando los efectos de la crisis económica capitalista mundial allí, a medida que los tenedores de bonos tratan de exprimir más ganancias de la isla, lo que aumenta la carga sobre los trabajadores y agricultores.

Miles de millones de dólares están siendo extraídos de la isla para pagar las crecientes deudas de Puerto Rico a los tenedores de bonos en el exterior. Los empleos industriales bajaron drásticamente de 160 mil a 75 mil entre 1996 y 2013, con una disminución del 30 por ciento en los últimos siete años.

Con una tasa oficial de desempleo del 14.2 por ciento —más del doble la cifra en Estados Unidos— los puertorriqueños, sean trabajadores o profesionales de clase media, están huyendo de la isla en números crecientes, la mayor emigración desde los años 50, cuando 470 mil se trasladaron a Estados Unidos.

Las condiciones de vida se están deteriorando para los que se quedan, desde la falta de luz en las calles, a la carencia de computadoras, aire acondicionado o fotocopadoras en las escuelas.

El 4 de febrero la agencia Standard & Poor's redujo el grado de la deuda de Puerto Rico clasificándola como "basura". Como resultado, el interés por la deuda de Puerto Rico que alcanza 70 mil millones de dólares, está aumentando y el gobernador Alejandro García Padilla tendrá que entregar 940 millones antes

Sigue en la página 11

Trabajadores textiles en Egipto exigen aumento de salarios



Huelguistas de la empresa Mahalla Weaving en febrero de este año.

POR PAUL MAILHOT

Cerca de 20 mil trabajadores textiles en Egipto se declararon en huelga el 17 de febrero, el octavo día de un paro que empezó cuando 12 mil trabajadores de la empresa Mahalla Weaving and

Movilizaciones populares derrocan gobierno ucraniano

Buscan derechos, quebrar dominio de Moscú



Reuters/Vasily Fedosenko

Kiev, Ucrania, protestan frente el parlamento el 22 de febrero. Manifestaciones populares desde noviembre abrieron el camino al derrocamiento del presidente Víctor Yanukóvich.

BY JOHN STUDER

El régimen del presidente ucraniano Viktor Yanukóvich fue derrocado después de tres meses de movilizaciones masivas y enfrentamientos con las fuerzas del gobierno. El tirano huyó del 22 de febrero, mientras cientos de miles de personas salieron a las calles, indignadas por la sangrienta represión de los días previos.

“La gente realmente cambió su forma de pensar debido a esto eventos”, dijo Roman Dakus al *New York Times*. “Antes, la gente pensaba, ‘Nada realmente depende de mí’... Pero después de esta situación, piensan diferentemente. Ellos creen en su lucha cuando están todos juntos”.

Al centro de la lucha de los trabajadores, jóvenes y otros contra Yanukóvich

están las aspiraciones de los ucranianos de liberarse de la dominación rusa. Rusia ha dominado Ucrania durante siglos, con la excepción de los primeros años de la Revolución Rusa de 1917, bajo la dirección de V.I. Lenin. Yanukóvich, odiado por su corrupción y su represión de los derechos políticos, se inclinó en todos momento ante la presión del presidente ruso Vladimir Putin a mantener el dominio económico y político de Moscú

Sigue en la página 10

Obreros pagan por la crisis capitalista con la reducción de salarios

POR BRIAN WILLIAMS

En aprietos por la profundización de la crisis capitalista de producción y comercio por todo el mundo, los patrones estadounidenses están atacando a la clase obrera, despidiendo trabajadores, aumentando la productividad y reduciendo los salarios y beneficios sociales logrados en luchas anteriores.

Los salarios se estancaron en 2013; aumentando solo un 0.4 por ciento cuando se toma en cuenta la inflación, informó el *New York Times* el 8 de febrero.

Las cifras oficiales del gobierno, sin embargo, no reflejan con precisión el impacto del aumento de precios para el pueblo trabajador. Los costos de los alimentos, combustible, alquiler y otros artículos de primera necesidad que consumen la gran mayoría del ingreso de los trabajadores son más altos que el llamado Índice de Precios al Consumidor.

Entre 2007 y 2012, los ingresos por hogar cayeron por cinco años consecutivos. Hoy los ingresos están un 6.4 por ciento por debajo de 2007.

Sigue en la página 10

La victoria del PST contra el espionaje del FBI ha tenido un impacto duradero en la política de clases

‘Cincuenta años de operaciones encubiertas en EEUU’, nuevo libro de la editorial Pathfinder

La nueva edición de Cincuenta años de operaciones encubiertas en EE.UU.: La policía política de Washington y la clase obrera norteamericana ya está a la venta. Esta primavera estará también disponible en inglés. El título del artículo principal del cual toma el nombre el libro, escrito por Larry Seigle, fue publicado por primera vez en la revista marxista New International en 1987. El libro también contiene el artículo “La guerra imperialista y la clase trabajadora”, escrito por Farrell Dobbs en 1949. Dobbs fue uno de los dirigentes centrales de las campañas de sindicalización de los Teamsters en la década de 1930 y secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores de 1953 a 1972. A continuación aparece la introducción al libro escrita por Steve Clark, miembro del Comité Nacional del PST. Derechos reservados ©2014 de Pathfinder Press. Reproducido con autorización.

POR STEVE CLARK

En agosto de 1987 un juez federal de distrito en Nueva York emitió una orden judicial en la que dictaminaba que ningún documento que el gobierno obtenga por métodos que violan la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos puede ser “utilizado, emitido o divulgado” por el FBI u otras agencias policíacas federales.

El juez Thomas Griesa decretó esta orden a raíz de su decisión un año antes, en agosto de 1986, sobre una demanda judicial entablada por el Partido Socialista de los Trabajadores en 1973.

El objetivo del partido era sacar a la luz pública las décadas de espionaje y desorganización por la policía política

federal, así como movilizar la oposición a estas violaciones de los derechos constitucionales, no solo de los miembros y partidarios del partido y de la Alianza de la Juventud Socialista, sino de otras organizaciones e individuos que habían sido objeto de las operaciones encubiertas del gobierno.

Aunque inmediatamente después de la decisión de Griesa de 1986 el Departamento de Justicia había anunciado que la apelaría, menos de dos años después el gobierno retiró su moción.

La batalla que el Partido Socialista de los Trabajadores libró durante 15 años con el apoyo de miles de personas y que dio lugar a ese fallo judicial federal, fue una victoria para la clase trabajadora. Además, esa victoria perdura y continúa teniendo un efecto directo más de cuatro décadas después de haberse entablado el pleito.

El primer artículo en este libro, “Cincuenta años de operaciones encubiertas en EE.UU.: La policía política de Washington y la clase obrera norteamericana”, por Larry Seigle, ofrece un relato de esa batalla política del PST y sus aliados. Fue una iniciativa política sin precedentes. Una organización comunista estaba entablando una demanda contra el gobierno capitalista, en vez de verse obligada a defenderse y a defender a sus miembros contra un caso fabricado por policías y fiscales. Los trabajadores comunistas —junto con otros sindicalistas, agricultores y partidarios de los derechos civiles— eran los demandantes, y las agencias y funcionarios del gobierno eran los acusados. Y no al revés.

La campaña política que el Partido



“No veo en estas acciones ningún obvio abuso de autoridad”, dice en su pie de nota esta caricatura que satiriza la declaración de julio de 1975 del entonces director del FBI Clarence Kelley, en la que justifica las décadas de allanamientos de oficinas de organizaciones obreras y opositores del gobierno, entre ellas, las de la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores. En 1973, el partido interpuso una demanda y organizó una campaña para sacar a la luz y asestar golpes al espionaje y a los ataques del FBI contra los derechos políticos.

Socialista de los Trabajadores organizó y dirigió, con un amplio apoyo, brindó un arma más que los sindicalistas, luchadores por los derechos de los negros y otros entre los explotados y oprimidos podían usar para defender mejor sus propios derechos constitucionales. Ante todo, ayudó a mantener el espacio político necesario para que el pueblo trabajador pueda debatir, organizarse y tomar acción más allá del ámbito electoral y judicial: para poder luchar en nuestro propio terreno, en las fábricas, en las líneas de piquetes y en las calles.

Algunos comunistas veteranos, quienes tenían experiencia directa con casos fabricados por el gobierno y ataques contra trabajadores combativos, al principio se resistieron a emprender dicho curso. ¿Acaso un pleito judicial no sería buscarse problemas? ¿Para qué poner en marcha algo que llevará a que el gobierno obligue a dirigentes del partido a prestar declaraciones indagatorias juradas? ¿Para qué terminar ante un tribunal burgués por voluntad propia?

Ese recelo era aún mayor entre algunos antiguos miembros del Partido Comunista y otros en el entorno del PC cuyo faccionalismo sin salida hacia el PST había menguado con el paso del tiempo, pero que aún se encogían ante la perspectiva de llevar a cabo actividades políticas abiertamente como comunistas, y mucho menos de hacerlo ante abogados federales y un juez. Entre otras cosas, ¿para qué exponer al escrutinio público la historia y el historial político de su partido?

Pero los dirigentes centrales del PST, desde los de las generaciones más viejas hasta aquellos de las más nuevas, estaban convencidos de que estaban cambiando las actitudes entre los trabajadores y los agricultores en Estados Unidos a raíz de las conquistas políticas del movimiento por los derechos de los negros, de las movilizaciones contra la Guerra de Vietnam y de otras luchas sociales. La clase gobernante capitalista y su gobierno estaban a la defensiva políticamente a consecuencia de lo que ya se venía conociendo sobre el espionaje, el acoso y la interferencia por la policía contra

los trabajadores y jóvenes que participaban en estas luchas. Para los gobernantes todo esto se multiplicó en 1973 ante las revelaciones muy difundidas de “Watergate” sobre los desenfrenados allanamientos e intervenciones electrónicas realizados por la administración Nixon contra sus rivales nacionales en la política capitalista.

Los dirigentes comunistas llegaron a la conclusión de que las condiciones, tomadas en su conjunto, eran excepcionalmente propicias para este tipo de campaña política. El Partido Socialista de los Trabajadores nunca le miente al pueblo trabajador, ni en Estados Unidos ni en otra parte del mundo. Su historia y su historial político son como un libro abierto. No tiene nada que ocultar. Al verse comprobadas en la vida misma estas conclusiones a lo largo de los próximos 15 años, las dudas y vacilaciones iniciales se transformaron en respeto y apoyo al curso político que el PST siguió en esta lucha.

Después de más de siete años de discovery (proceso en que los abogados de ambas partes recopilan información para preparar el caso), el juicio comenzó en abril de 1981. El proceso judicial se extendió durante 12 semanas. En su decisión de 1986 a favor de la demanda del PST, la corte falló que no había hallado pruebas “de que ningún informante del FBI haya denunciado jamás un solo caso real o planificado de espionaje, violencia [o] terrorismo” por el partido o sus miembros. Por primera vez, una corte federal dictaminó:

- que el empleo de informantes del FBI o de otras agencias policíacas para infiltrarse en organizaciones y espiar a individuos que participan en actividades políticas, incluidos comunistas y otros militantes obreros, viola el derecho a la vida privada y la libertad de asociación garantizados en la Carta de Derechos (durante el juicio, el gobierno reconoció que el FBI por sí solo —sin contar la CIA, la inteligencia militar u otras agencias entre los acusados— había recogido o robado 10

Sigue en la página 14

¿Quiere leer más?....

50 años de operaciones encubiertas

Explica el origen del estado de “seguridad nacional” en EE.UU., la expansión de poderes presidenciales y la lucha durante décadas de los trabajadores socialistas contra el espionaje y hostigamiento gubernamentales. \$10

El socialismo en el banquillo de los acusados

James P. Cannon fue el principal acusado en el juicio por sedición en Minneapolis contra 18 dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y el movimiento obrero encarcelados en 1941 bajo acusaciones fabricadas de conspiración para derrocar al gobierno. En su testimonio, Cannon presenta el programa comunista de la vanguardia de la clase obrera. \$16

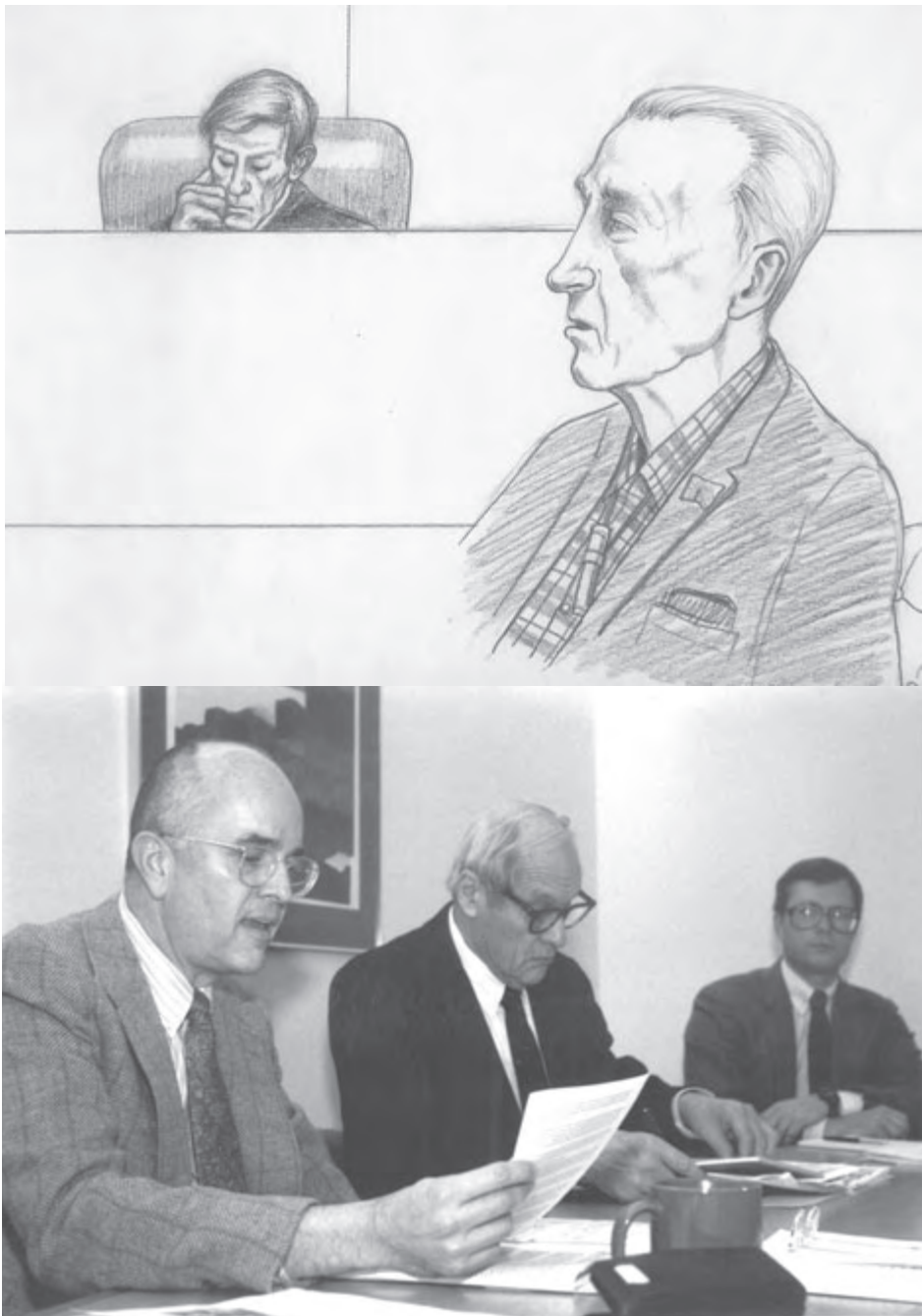
Voces desde la cárcel: Los Cinco Cubanos

La indolegable dignidad de integridad de los Cinco Cubanos les ha ganado el respeto de miles en todo el mundo incluso entre sus compañeros de cárcel. Aquí hablan tres que los conocieron tras las rejas. Además, escritos sobre la vida y resistencia en las cárceles de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Elizabeth Palmeiro (esposa de Ramón) y el independentista puertorriqueño Rafael Cancel Miranda. También en inglés. \$7 Oferta especial: \$5

‘Yo me muero como viví’

15 acuarelas de Antonio Guerrero para el 15 aniversario del encarcelamiento de los Cinco Cubanos. Textos de Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón Labañino. También en inglés. \$7 Oferta especial: \$5

pathfinderpress.com



Arriba, dibujo del Militante de Diane Jacobs; Derecha: Tony Savino

Arriba, dibujo del ex Secretario Nacional del PST Farrell Dobbs al presentar su testimonio frente al juez federal Thomas Griesa en el juicio sobre la demanda en 1981. Abajo, desde la izquierda, el Secretario Nacional del PST Jack Barnes; el abogado de libertades civiles Leonard Boudin y John Studer, director del Fondo de Defensa de los Derechos Políticos, en una conferencia de prensa en 1988 después de que el gobierno anunció que no iba a apelar la decisión del juez Griesa que declaraba que las operaciones del FBI contra el partido eran constitucionales ni la orden judicial emitida por el juez prohibiendo que las agencias del gobierno utilizaran para ningún propósito los archivos obtenidos por medio del espionaje ilegal.

Viene de la página 15

millones de páginas de expedientes sobre los socialistas);

- que los allanamientos cometidos por la policía para robar o copiar documentos o plantar micrófonos violan las protecciones de la Cuarta Enmienda a la Constitución contra “los registros y las incautaciones irrazonables” (el FBI reconoció haber efectuado por lo menos 204 de estos allanamientos, conocidos como *black bag jobs* [operativos de bolsa negra], en las oficinas del partido solo entre 1945 y 1966); y
- que la desorganización encubierta de las actividades del partido y de la vida de sus miembros y partidarios es una violación de la ley (se describen numerosos ejemplos de este acoso en los libros *FBI on Trial: The Victory in the Socialist Workers Party Suit against Government Spying* (El juicio contra el FBI: La victoria en la demanda del Partido Socialista de los Trabajadores contra el espionaje por el gobierno), editado por Margaret Jayko, y *Cointelpro: the FBI's Secret War on Political Freedom* (Cointelpro: La guerra secreta del FBI contra la libertad política), por Nelson Blackstock, ambos publicados por Pathfinder).

Un año más tarde, dando seguimiento a esas decisiones, Griesa emitió su orden “respecto a los documentos que el gobierno obtuvo mediante actividades claramente ilegales”. El juez federal prohibió que estos archivos fueran “utilizados, emitidos o divulgados por los acusados... por

cualquier motivo salvo cumplir con una orden emitida por este tribunal, solicitado por notificación, o como respuesta legal a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información”.

Cincuenta años de operaciones encubiertas en EE.UU. se publicó originalmente en 1987 en inglés en la revista marxista *New International*, y al año siguiente en español como un librito. Según indica el artículo, se escribió antes de que el juez Griesa hubiera tomado decisiones finales en 1987 sobre todos los asuntos en la demanda judicial y antes de que el gobierno hubiera tirado la toalla en 1988 al no apelar el fallo.

Tras este desenlace de la batalla del PST, se dieron otros dos hitos en la larga historia del partido de defender los derechos políticos del pueblo trabajador, incluidos los de sus propios miembros.

El 4 de marzo de 1988, Mark Curtis, miembro del PST y obrero en la fábrica empacadora de carne Swift en Des Moines, Iowa, fue arrestado y golpeado brutalmente por la policía. Esto ocurrió apenas unas horas después de que él participara en una reunión en defensa de 17 compañeros de trabajo, arrestados por la policía de inmigración durante una redada de la fábrica y amenazados con ser deportados. Él fue acusado falsamente de violación y allanamiento de morada, y en septiembre de 1988 fue a juicio. A través de una amplia campaña internacional de defensa, se exigió que las autoridades de Iowa desecharan los cargos y luego —cuando fue decla-

rado culpable y sentenciado a 25 años de cárcel— que Curtis fuera puesto en libertad. Fue excarcelado bajo libertad condicional en junio de 1996.

Una semana antes de que comenzara el juicio contra Curtis, el Partido Socialista de los Trabajadores ganó una victoria en otra campaña de defensa, la cual había estado librando durante 11 años con un apoyo muy amplio. El 31 de agosto el Departamento de Estado norteamericano finalmente abandonó los intentos del gobierno de deportar a Héctor Marroquín, un joven nacido en México, miembro de la Alianza de la Juventud Socialista y del PST y demandante en el pleito judicial del partido, y le otorgó la residencia permanente.



La decisión de 1986 del tribunal federal de que el presidente de Estados Unidos “no puede tener la facultad de actuar de manera inconstitucional” se mantiene en pie hasta el día de hoy, frente a la implacable expansión de los poderes ejecutivos y policiales durante cuatro presidencias republicanas y demócratas desde que se emitió el fallo: las de George H.W. Bush, William Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

La Casa Blanca de Obama —y los profesionales, académicos y demás individuos meritocráticos de mentalidad burguesa entre los cuales la administración recluta a su personal y organiza su apoyo— está llevando esta tendencia a niveles sin precedentes. “En cualquier momento que se presente la oportunidad y yo tenga la autoridad ejecutiva para lograr que se hagan algunas cosas, simplemente vamos a hacerlas”, dijo el presidente en una entrevista en el programa “60 Minutes” de la cadena CBS en diciembre de 2011.

Los hechos confirman sus palabras: desde la acelerada ampliación (y la justificación política) de las interceptaciones telefónicas y de la Internet en Estados Unidos y otros países, hasta los más de 400 mortíferos ataques “no reconocidos” de *drones* desde principios de 2009 en Pakistán, Yemen y Somalia; el fuerte aumento en la deportación de inmigrantes y en las “redadas silenciosas” contra los trabajadores indocumentados en las fábricas y otros centros de trabajo; la manera en que el buró federal de impuestos (IRS) se enfocó en examinar los archivos tri-

butarios del “Tea Party” (Partido del Té) y de otros grupos conservadores; y la creciente vigilancia de los registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas y el enjuiciamiento criminal contra sus fuentes bajo la Ley de Espionaje de 1917. Esta tendencia se manifiesta también en la aplicación por la actual administración de sanciones más severas contra empresas estadounidenses y extranjeras acusadas de violar el embargo de Washington contra Cuba, y de sanciones más severas impuestas unilateralmente contra Irán; evadirse de que el Congreso revise los nombramientos presidenciales y aspectos del presupuesto federal; y la fuerte expansión y el mayor uso de reglamentos federales que evitan la necesidad de presentar nuevas leyes para ser debatidas y votadas; y mucho más.



La victoria en esta prolongada batalla política del Partido Socialista de los Trabajadores ha reforzado sus esfuerzos constantes desde mediados de los años 70 para asegurar la mayor protección posible de los contribuidores financieros a las campañas del PST, incluidas las campañas para puestos públicos.

En abril de 2013, la Comisión Electoral Federal (FEC) prorrogó cuatro años más la exención del partido de los requisitos de que los candidatos deben entregar los nombres de sus contribuidores y de aquellos que prestan servicios remunerados al partido por trabajos de impresión u otros asuntos comerciales. La decisión de la FEC citó el fallo judicial federal de 1986, así como unas 70 declaraciones de trabajadores y otras personas que han apoyado a candidatos comunistas y las actividades públicas del PST. Estas declaraciones documentaban despidos, casos de espionaje y acoso policiaco y amenazas y ataques derechistas contra el partido y sus miembros y partidarios desde 2009, cuando la FEC había otorgado su anterior exención.

La “hostilidad del gobierno y el acoso público y privado contra el PST fue extenso”, dictaminó la FEC, y “por tanto continúa sirviendo de apoyo a la actual solicitud del PST” de prorrogar su exención de la divulgación de nombres por la cual ha luchado y que ha ganado seis veces desde 1974. Esta fue una vic-

Sigue en la página 13



AP Photo/Don Ryan

Miembros del Local 21 del sindicato ILWU en Longview, Washington, protestan contra el cierre patronal de la empresa EGT Development el 7 de septiembre de 2011. Documentos que han salido a la luz recientemente muestran que la batalla sindical y las personas que respaldaban la lucha habían sido blanco de los espías federales.

Victoria contra espionaje

Viene de la página 14

toria no solo para el PST sino para todo el pueblo trabajador y para los derechos constitucionales. Fue el primer exitoso empujón de resistencia en bastante tiempo por parte de una organización obrera frente a estos años de creciente “regulación” política, social y económica por los patrones y su gobierno.

Entre los liberales, la cruzada a favor de la “transparencia” política y la “divulgación” financiera es una causa sagrada. Pero encubre realidades y conflictos de clase fundamentales: sobre todo, el hecho de que no solo el poder económico y financiero está en manos de la clase capitalista sino todo el poder político y militar. Ese es el origen de la hipocresía en torno a la “transparencia” y del daño que las “divulgaciones” impuestas por el gobierno le causan a la mayoría explotada.

La demanda de poner fin a la diplomacia secreta, a los secretos comerciales y a las operaciones encubiertas policiales ha sido y sigue siendo parte del programa del movimiento comunista. Cada paso que se da para poner fin a la capacidad de los gobernantes acaudalados de obrar secretamente de manera legal representa un avance para el pueblo trabajador en Estados Unidos.

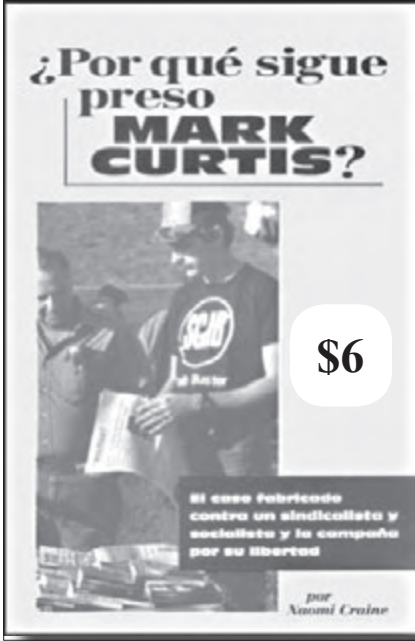
En cambio, cuando se imponen a partidos obreros tales como el PST, a los sindicatos, a los grupos por los derechos de los negros o a las organizaciones agrícolas de protesta, las medidas de “divulgación” y “transparencia” son instrumentos para darles rienda suelta al gobierno capitalista, a la policía y a grupos e individuos derechistas para investigar, desorganizar y tratar de destruir al movimiento obrero. Son obstáculos políticos que se interponen a la organización efectiva de una defensa de quienes se ven amenazados por ataques del gobierno y a la acción independiente obrera de masas a favor de los intereses del pueblo trabajador.



Cincuenta años de operaciones encubiertas en EE.UU. destaca la trayectoria proletaria durante un siglo y medio que ha hecho posible lo que el Partido Socialista de los Trabajadores ha logrado a través de su campaña política, para exponer el espionaje y acoso del gobierno y para movilizar la oposición a éste. Desde el momento en que el PST entabló su demanda judicial en 1973, hasta el juicio y los procedimientos después del juicio, dice el artículo, el gobierno se empeñó:

en probar que el partido decía una cosa

PathfinderPress.com



en público y otra cosa en sus reuniones cerradas. Intentaron demostrar que el partido mantenía estructuras paralelas, una para fines públicos y otra estructura oculta. En cada caso, los hechos demostraron lo contrario. Si bien un partido obrero tiene el derecho —de hecho, tiene la responsabilidad— de proteger la vida privada de sus miembros y simpatizantes contra la intromisión de los patrones y la policía, no tiene derecho a ocultar del pueblo trabajador sus ideas, métodos y conceptos organizativos...

Como lo demostró el juicio, el FBI, al acusar al PST de conspiración y metas ocultas, simplemente estaba proyectando sus propios métodos. Resultaron ser la Casa Blanca y el FBI, no el PST, los que ocultan sus verdaderos objetivos y métodos. Resultaron ser la Casa Blanca y el FBI, no el PST, los que mantienen una estructura secreta para hacer lo que no pueden proclamar en público. Resultaron ser la Casa Blanca y el FBI, no el PST, los que usan métodos conspirativos para lograr sus objetivos a espaldas del pueblo de Estados Unidos.

El artículo delinea la expansión de la policía política de Washington a partir de la respuesta represiva del imperialismo norteamericano, tras la Primera Guerra Mundial, a la revolución dirigida por los bolcheviques en Rusia en octubre de 1917 y la creación de la Internacional Comunista dos años más tarde, así como su impacto en los trabajadores y agricultores en Estados Unidos que buscaban emular esos ejemplos revolucionarios. Ante todo el gobierno pretendía aplastar las organizaciones comunistas recién fundadas en Estados Unidos en 1919. (Ya en aquellos años, J. Edgar Hoover encabezaba la agencia policiaca del Departamento de Justicia que acosaba a trabajadores comunistas y anarquistas, a sus organizaciones y a dirigentes negros tales como Marcus Garvey y A. Philip Randolph. Esa agencia se convirtió en el Buró Federal de Investigación —el FBI— en 1935, y Hoover siguió siendo su director hasta su muerte en 1972).

Este libro se enfoca especialmente en la administración demócrata del presidente Franklin Roosevelt a fines de los años 30, cuando los gobernantes de Estados Unidos se preparaban para sumarse a la matanza interimperialista de la Segunda Guerra Mundial. Describe el desarrollo y la consolidación del estado de “seguridad nacional” después del triunfo militar, político y económico de Washington en esa guerra frente a sus rivales imperialistas, tanto sus “enemigos” (Alemania, Austria, Italia y Japón) como sus “aliados” (el Reino Unido, Francia y otros).

La condena y el encarcelamiento en 1941 de 18 dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores y de la dirección con disposición de lucha de clases del Local 544-CIO del sindicato Teamsters en Minneapolis fue un hito en el desarrollo de la policía política del capital estadounidense. El caso amañado fue la primera vez que la administración Roosevelt usaba la Ley Smith —la Ley de la Mordaza— que prohibía abogar por las ideas revolucionarias, me-



Sociedad Histórica de Minnesota

Huelguistas del sindicato Teamsters se enfrentan a la policía y a matones en Minneapolis, el 22-23 de mayo de 1934. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Roosevelt organizó la fabricación de cargos contra los dirigentes del sindicato Teamsters en Minneapolis y del PST por organizar resistencia efectiva en los sindicatos contra la esfuerzos bélicos de Washington. Derecha, edición del periódico *The Industrial Organizer* en 1941 informando sobre el inicio del juicio contra los dirigentes obreros.



dida que el presidente demócrata había promulgado el año anterior. El verdadero “crimen” que estos dirigentes obreros habían cometido era que estaban organizando con efectividad la oposición política dentro de los sindicatos a la campaña de Roosevelt para atizar el apoyo popular para los objetivos bélicos de los gobernantes norteamericanos, por los cuales iban a mandar a los trabajadores y agricultores a pelear y morir.

Durante el juicio realizado a raíz de la demanda del PST en 1981, uno de los principales testigos del gobierno —Robert Keuch, un vicefiscal general adjunto— fue interrogado por un abogado del PST sobre el decreto ejecutivo en que Roosevelt había ordenado que el FBI incrementara su “investigación” de “actividades subversivas”. Keuch contestó que “sencillamente existen maneras en que pueden actuar tanto individuos como grupos que no necesariamente constituyan violaciones de los estatutos criminales” (léase: que son legales incluso bajo el derecho burgués estadounidense). La Casa Blanca estaba preocupada ante todo por aquellos “que intentaban influenciar la opinión pública para mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, mantenernos neutrales”, dijo el funcionario del Departamento de Justicia en su testimonio.

El “crimen” de “intentar influenciar la opinión pública” sobre la guerra inminente bastaba para que Roosevelt hiciera trizas la Carta de Derechos.

Esta nueva edición incluye el artículo “La guerra imperialista y la clase trabajadora” de Farrell Dobbs, que trata sobre estos orígenes de la “guerra encubierta” de Washington dentro de Estados Unidos. Dobbs fue uno de los que fueron condenados bajo la Ley Smith, uno de los dirigentes de las campañas de sindicalización de los Teamsters en Minneapolis y el norte del Medio Oeste, y más tarde uno de los dirigentes centrales del PST durante décadas. Escribió esto en 1949 como introducción a la tercera edición de *Socialism on Trial* (El socialismo en el banquillo de los acusados), el testimonio que dio James P. Cannon, secretario nacional del PST, en el juicio de 1941.

Dobbs también recuenta y condena el proceso judicial en Nueva York a principios de 1949 contra 11 dirigentes del Partido Comunista, que se describe en

el primer artículo de este libro. Todos fueron declarados culpables, y 10 recibieron la máxima sentencia de cinco años. Dobbs, quien cubrió este juicio amañado cada semana para el *Militant* durante los nueve meses que duró, subraya el golpe político que la dirección del Partido Comunista le propinó al movimiento obrero al negarse a defender a los primeros acusados bajo la Ley Smith durante el juicio de Minnesota en 1941.

De hecho, la dirección del PC aplaudió públicamente el enjuiciamiento e hizo campaña en los sindicatos para sofocar el apoyo a los acusados. Earl Browder, secretario general del partido, y otros dirigentes del PC hasta prepararon un expediente para el Departamento de Justicia con la esperanza de reforzar el caso del gobierno contra los dirigentes del PST y los militantes sindicales. Philip Jaffe, un antiguo dirigente del Partido Comunista, detalla en su libro *The Rise and Fall of American Communism* (El ascenso y la caída del comunismo americano), publicado en 1975, el contenido del expediente, del cual recibió una copia de Browder.

La manera en que la dirección del PC pisoteó la solidaridad obrera más elemental se relata también en un libro publicado en 1993, *Advocate and Activist: Memoirs of an American Communist Lawyer* (Defensor y activista: Memorias de un abogado comunista americano), por John Abt, principal abogado del partido por mucho tiempo y uno de sus cuadros dirigentes remontándose a los años 30. El PC cometió “un error terrible al no defender al PST” durante el juicio de Minneapolis, dijo Abt.

Abt reconoció que en esa época él aceptaba la línea de la dirección del PC. “Nunca nos imaginamos”, dijo, “que en el periodo de la posguerra la Ley Smith sería la principal arma judicial para atacar a nuestro Partido y encarcelar a sus dirigentes”.

¡Nunca nos imaginamos! La verdad es que los acusados del PST y de los Teamsters así como sus partidarios lo explicaron una y otra vez a cualquiera que los escuchara en el movimiento obrero (y muchos lo hicieron, según lo demostró el apoyo a la campaña de defensa, dirigida por el Comité de Defensa de los Derechos Civiles, por parte de 150 sindicatos internacionales y locales que representaban a más de 5 millones de trabajadores, así como cientos de otros individuos y organizaciones).

Signe en la página 12

Cincuenta años de operaciones encubiertas en EEUU

Viene de la página 13

Unas cuatro décadas más tarde, dijo Abt, participó en una reunión de la dirección nacional del Partido Comunista y la instó a que apoyara la demanda judicial del PST contra el espionaje y el acoso por la policía federal. Subrayó lecciones de lo que había hecho la dirección del PC en 1941. Pero Abt perdió en la votación, “y el Partido de nuevo se negó a defender al PST contra el acoso del gobierno”.



Otra conquista política de la campaña del PST contra la Casa Blanca y las agencias policiacas federales es que los fallos de Griesa no distinguen entre los miembros y partidarios del partido que son ciudadanos de Estados Unidos y los que no son. Ambos están amparados por la decisión y la orden judicial (aunque la corte no tomó posición sobre temas concretos respecto a la residencia o la deportación).

Una de las agencias federales que fueron acusadas en la demanda judicial del partido fue la policía de inmigración de los gobernantes norteamericanos. En esa época se llamaba Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN). Ahora se conoce como Control de Inmigración y Aduanas (ICE). A pesar del cambio de nombre, es conocida y odiada como “la migra” por los trabajadores que son sus víctimas y por millones de otros que saben cómo los capitalistas la usan para dividir y debilitar la solidaridad y el poder combativo de la clase obrera, los sindicatos y las protestas contra todo tipo de discriminación.

De hecho, la deportación fue uno de los primeros y más brutales garrotes que usaron los patrones y su gobierno en la campaña represiva contra el movimiento obrero después de la Primera Guerra Mundial. En lo que llegó a conocerse como las connotadas Redadas de Palmer, por el nombre del fiscal general norteamericano en esa época, más de 3 mil anarquistas, comunistas y otros militantes obreros fueron arrestados y 750 fueron deportados en 1919 y 1920.

Desde entonces, el Partido Socialista de los Trabajadores ha luchado contra repetidos intentos de la clase gobernante de usar esta arma contra cuadros y dirigentes del partido, y frecuentemente ha movilizado apoyo internacional ampliamente en los sindicatos y entre otros partidarios de los derechos políticos. Además del caso ya mencionado de Héctor Marroquín, ha habido los siguientes intentos infructuosos de depor-



Foto arriba: Militante/Eric Simpson

El secretario del PST Jack Barnes, habla en mitin en 1988 en vísperas del juicio del trabajador de la carne Mark Curtis, izquierda, quién fue arrestado, golpeado y acusado falsamente por la policía de Des Moines, Iowa. “No impedirán que Mark siga siendo la misma persona que es hoy”, dijo Barnes, “sin importar en donde se encuentre, o por cuanto tiempo”. Derecha, Andile Yawa, un dirigente de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, visita a Curtis en la prisión estatal de Iowa en 1992. Después de 8 años de una campaña internacional de defensa, Curtis logró obtener su libertad condicional en 1996.

tación, entre otros:

- Carl Skoglund en los años 40 y 50, nacido en Suecia, dirigente fundador del movimiento comunista y del PST y uno de los 18 socialistas y dirigentes de los Teamsters encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial;
- Joe Johnson, miembro del partido cuya lucha a mediados de los años 60 se libró usando el folleto, *They Have Declared Me a Man Without a Country* (Me han declarado un hombre sin país); y más recientemente
- Róger Calero, nacido en Nicaragua, dirigente del PST y redactor del semanario *El Militante* que en 2003 derrotó los intentos de la migra de deportarlo cuando regresaba de un viaje periodístico a Cuba y México, y que logró restaurar su condición de residente permanente que había tenido desde 1989.



Para los trabajadores comunistas, defendernos no es principalmente un problema de argumentos jurídicos y tácticas en la corte, aunque los trabajadores de disposición revolucionaria abordan estas cuestiones con la mayor disciplina y atención proletaria a los detalles.

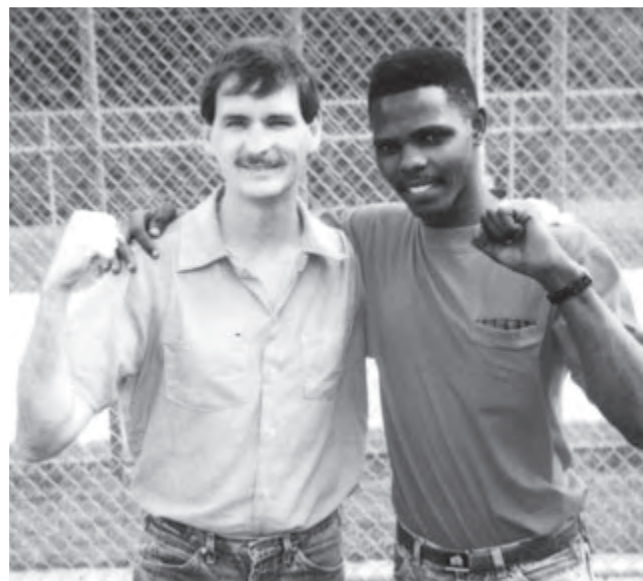
Al igual que todo aspecto de la lucha de clases, la manera en que los trabajadores nos defendemos de casos ama-

ñados y otros ataques por el gobierno es ante todo una cuestión *política*. Se enmarca en el avance de la clase obrera por el camino revolucionario rumbo a remplazar el poder estatal de una minúscula minoría de familias propietarias —la dictadura del capital— con el de la gran mayoría, de los trabajadores y agricultores.

Esto ha sido así desde los inicios del movimiento obrero moderno. Se pueden destacar dos ejemplos notables: la campaña de defensa dirigida por Carlos Marx y Federico Engels hace más de 160 años por la libertad de 11 de sus compañeros, quienes fueron objeto de un caso amañado en Alemania bajo cargos de “conspiración” para derrocar al gobierno prusiano después de la derrota de las revoluciones de 1848–49 por toda Europa (lo que llegó a conocerse como el Juicio contra los Comunistas en Colonia); y la campaña por la amnistía que en 1955 logró la excarcelación de Fidel Castro y otros combatientes que la dictadura cubana enjuició y condenó por su asalto insurreccional a los cuarteles militares en Santiago de Cuba y en Bayamo el 26 de julio de 1953. El asalto al Moncada y la trayectoria política dirigida por Fidel Castro, su principal organizador, iniciaron la lucha revolucionaria que en 1959 llevaría al triunfo de la Revolución Cubana contra la tiranía apoyada por Washington de Fulgencio Batista.

El testimonio y las declaraciones ante la corte así como otros documentos para la defensa, preparados por dirigentes obreros al librar estas batallas, en muchos casos se transforman en poderosos instrumentos de propaganda revolucionaria.

Así fue con las *Revelaciones sobre el proceso contra los comunistas en Colonia*, escrito por Carlos Marx durante y justo después del juicio en 1852 en que siete de los 11 acusados fueron declarados culpables. Marx demostró en esas páginas que un juicio por



“conspiración” organizado por la clase dominante y su gobierno “no requiere acción procesable” y es “simplemente un pretexto para quemar a herejes políticos legalmente”.

Así fue con el testimonio de James P. Cannon en el juicio de 1941 por cargos bajo la Ley Smith, publicado como *El socialismo en el banquillo de los acusados* y vendido desde entonces como una introducción al programa comunista.

Así fue con el alegato, reconstruido posteriormente en la cárcel, que Fidel Castro presentó ante la corte en 1953, *La historia me absolverá*, que se convirtió en el programa no oficial del Movimiento 26 de Julio, difundido clandestinamente en miles de ejemplares por toda Cuba durante la lucha revolucionaria.

Así fue con “Estoy dispuesto a morir”, la declaración que Nelson Mandela hizo desde el banquillo durante el juicio en 1964 que lo condenó a cadena perpetua como castigo por su dirección de la lucha revolucionaria para derrocar al régimen supremacista blanco en Sudáfrica.

Al publicarse *Cincuenta años de operaciones encubiertas en EE.UU.* en esta nueva edición, los trabajadores y agricultores en Estados Unidos y a nivel mundial están enterándose de otra batalla internacional de defensa —y se están sumando a ella— en números crecientes: la lucha por la libertad de cinco revolucionarios cubanos encarcelados en Estados Unidos desde 1998.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González —conocidos por millones de personas como los Cinco Cubanos— fueron encarcelados por Washington bajo una colección de diversos cargos amañados de “conspiración”. Ellos habían estado recogiendo información para el gobierno cubano sobre los planes asesinos de grupos para-

Sigue en la página 11



Bill Hackwell

Protesta frente a la Casa Blanca, 1 de junio de 2013, para expandir la campaña internacional por la libertad de los Cinco Cubanos, encarcelados en EE.UU. desde septiembre de 1998 bajo cargos amañados. Se han ganado el respeto de sus compañeros de cárcel por su integridad, su ejemplo cotidiano de liderazgo, su consideración hacia otros y su explicación paciente de la Revolución Cubana cuyos valores ejemplifican.

Campaña del ‘Militante’

Viene de la portada

de Ucrania el cual atrajo a cientos de personas. “Fue divertido estar ahí”, dijo Dan Fein. “Algunas personas preguntaron, ‘¿Así que eres un comunista, ¿por qué estás aquí?’ Les expliqué que el *Militante* y el Partido Socialista de los Trabajadores apoyan la lucha en Ucrania y se oponen a la dominación rusa. ‘Me gusta esto’, dijo uno de ellos al leer el encabezado del periódico: Un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador”.

Los partidarios vendieron 71 ejemplares de las ediciones más recientes del periódico. Tres participantes compraron suscripciones introductorias. “De todas las personas con las que hablé, aproximadamente la mitad se llevó el periódico”, dijo Fein.

En una manifestación en Sacramento, California, el 11 de febrero en solidaridad con los presos que se declararon en huelga de hambre el verano pasado, Brenda Cheatham, madre de uno de los presos que estaba en huelga de hambre en la prisión estatal

de Pelican Bay, obtuvo una suscripción introductoria, escribió Joel Britton de San Francisco.

Otro participante de la protesta, un ex preso que recientemente renovó su suscripción, compró *Yo me muero como viví* y *Voces desde la cárcel*. Desde que estos libros salieron a la venta, los partidarios en San Francisco han vendido 410 ejemplares de *Yo me muero como viví* y 28 de *Voces desde la cárcel: Los Cinco Cubanos*, muchos de ellos a personas que nunca antes habían oído hablar de los Cinco Cubanos. Los dos libros son unos de los 10 libros en venta especial con una suscripción (ver anuncio en la página 10).

“Un equipo que fue de puerta en puerta a Santa Rosa, donde los estudiantes de secundaria han estado protestando el asesinato de Andy Lopez, de 13 años de edad, a manos de la policía el pasado octubre, vendió cuatro suscripciones, incluyendo dos suscripciones introductorias, una renovación y una suscripción de seis meses a un trabajador de atención médica domiciliaria de Fiji que no había visto el pe-



Militante/Janice Lynn

Luvia Ortega, izq., trabajadora en una fábrica de productos plásticos, renueva su suscripción al *Militante* en Stockbridge, Georgia el 23 de febrero con Susan LaMont durante visita a su casa.

riódico previamente”, escribió Britton.

“Un profesor asistente nos mostró, cuando llamamos a su puerta, unas obras de arte que su tío está pintando en la cárcel”, informó Jacquie Henderson de Omaha, Nebraska. “Ella es una de varios lectores que nos dijeron que quieren ayudar a promover la muestra de las pinturas de

Antonio Guerrero que han sido publicadas en *Yo me muero como viví* en una galería importante de esta ciudad en junio”.

Para renovar, obtener una suscripción o unirse a la campaña, póngase en contacto con uno de los distribuidores que aparece en la lista en la página 6 o con el *Militante*, al (212) 244-4899.

Crisis social, deuda golpean a Puerto Rico, colonia de EEUU

Viene de la portada

de la fecha programada originalmente.

La deuda de Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos desde 1898, es más grande que el valor del producto bruto anual del país. El 15 por ciento del presupuesto del gobierno, está dedicado al servicio de la deuda.

Básicamente, el gobierno tiene que hacer más préstamos solo para pagar los préstamos anteriores.

Los aproximadamente 4.5 mil millones de dólares anuales al servicio de la deuda son el doble del presupuesto anual para infraestructura de Puerto Rico. Miles de millones de dólares salen de la isla “para pagar a los tenedores de bonos y a los acreedores sin crear un solo empleo o contribuir un centavo al desarrollo económico”, señaló el semanario *Caribbean Business* en su edición del 13 de febrero.

Desde que asumió el poder el año pasado, García Padilla ha buscado “estabilizar” la economía haciendo que los trabajadores sean los que paguen el precio. Cortó las pensiones de los trabajadores del gobierno, redujo el número de trabajadores públicos, aumentó la edad de jubilación, aumentó el costo del agua en un 60 por ciento y los impuestos sobre la venta y la gasolina..

“No tenemos personal suficiente incluso para controlar la medición de electricidad para los grandes clientes comerciales”, dijo por teléfono desde Guaynabo Roberto García Cooper, un electricista de la empresa eléctrica estatal, el 18 de febrero. “Cuando alguien se jubila no es reemplazado. Pero la constitución dice que hay que pagar a los tenedores de bonos antes que a nadie”.

‘Raíz del problema es colonialismo’

“La raíz del problema es el colonialismo”, dijo el veterano dirigente independentista Rafael Cancel Miranda al *Militante* por teléfono el 17 de febrero. “Es un cáncer. Mientras no se toca el cáncer no se cura”.

“El imperialismo estadounidense aniquiló nuestra agricultura. Antes producíamos el 75 por ciento de lo que consumíamos, ahora tenemos que importar el 85 por ciento”, dijo.

Se refería a la Operación Manos a la

Obra, un “plan de desarrollo” promovido por Washington que consistía en cortes de impuestos y otros incentivos a patrones norteamericanos para expandir las plantas de costura y farmacéuticos e impulsar a los agricultores a que abandonaran la tierra. La fuerza laboral agrícola de la isla cayó del 36 por ciento en 1950 al 4.8 por ciento en 1980. Miles de hectáreas de tierra de cultivo de primera fueron abandonadas.

Actualmente, esas políticas, junto con la crisis económica capitalista mundial, han hecho que un tercio de la población de la isla dependa de las estampillas de comida, que se usan para pagar por alimentos importados de Estados Unidos.

50 años de operaciones encubiertas en EEUU

Viene de la página 12

militares cubanoamericanos en Florida que han actuado impunemente en territorio norteamericano. Su objetivo era ayudar a poner fin a ataques violentos en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y otros países.

Durante su juicio y la imposición de sentencias en 2000 y 2001, los Cinco se comportaron con orgullo y dignidad al defender sus principios revolucionarios y rebatir los cargos que las autoridades federales les habían fabricado. Ante todo, se negaron a declararse culpables a cambio de la oferta de una sentencia menor. Cada uno de ellos dijo en su audiencia de sentencia, y lo han reiterado muchas veces desde entonces, que actuaría de la misma manera a fin de poner fin a las muertes causadas por asesinatos y atentados dinamiteros. Como lo expresó Gerardo Hernández, a quien le impusieron la sentencia más severa, una doble cadena perpetua, ésta es “sangre por la que un día juré que estaría dispuesto a sacrificar mi propia vida”.

A través de los años desde su encarcelamiento, los Cinco han ganado el respeto de otros presos por su entereza, su ejemplo cotidiano de liderazgo, su consideración por otros reos cuyas condiciones comparten como hermanos, y su explicación paciente de la Revolución Cubana cuyos valores socialistas y de internacionalismo proletario ellos ejem-

plifican en sus convicciones políticas y su conducta.

Ni la “justicia” capitalista impuesta a los Cinco Cubanos a lo largo de tres administraciones —Clinton, Bush y Obama— ni la conducta ejemplar de los cinco revolucionarios frente a ella representan algo nuevo para el movimiento obrero comunista en Estados Unidos y a nivel mundial. Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, señaló estas realidades del dominio capitalista y de la lucha de clases en sus palabras ante un mitin en Des Moines, Iowa, en septiembre de 1988, en la víspera del inicio del juicio contra Mark Curtis.

“Mark Curtis no va a recibir un juicio justo”, dijo Barnes a los más de 400 participantes en ese evento. “No es en la sala del tribunal donde se decidirá la inocencia y la culpabilidad, ni donde se encontrará la justicia”.

“La presunción de la inocencia es una conquista que al pueblo trabajador le ha tomado cientos de años para ganar”, dijo Barnes. Es “uno de los hitos más importantes en la marcha hacia la solidaridad humana”.

Sin embargo, cuando los trabajadores están en el banquillo de los acusados, desde el punto de vista de los gobernantes capitalistas, “es la presunción de culpabilidad la que impera en los Estados Unidos ‘democráticos’”, dijo. Los pa-

trones y su gobierno “quieren que los obreros de la industria de la carne, los obreros del papel, los mineros— los trabajadores de todo tipo que van a luchar—captan el mensaje de que hay límites a sus posibilidades de luchar”.

Por eso era tan importante la campaña mundial de defensa, dijo Barnes. Los gobernantes capitalistas subestiman a los militantes de disposición revolucionaria, igual que subestiman la fuerza de la solidaridad entre la clase obrera y entre otros defensores de los derechos políticos. Independientemente de lo que sea el veredicto, insistió, “No hay manera posible que logren su objetivo. No van a mantener preso a Mark Curtis por 25 años. No van a ponerlo de rodillas.

“No van a impedir que él siga siendo la misma persona que es hoy, luchando por las mismas cosas, abrigando las mismas convicciones profundas, diciéndolas abiertamente al mundo entero. Lo seguirá haciendo, no importa dónde se encuentre, por el tiempo que sea”.

Así ha sido con muchos miles de militantes obreros que han sido objeto de cargos amañados y encarcelados en el largo y tortuoso camino revolucionario hacia el poder de los trabajadores y agricultores en Estados Unidos y por todo el mundo. Seguirá siendo así. Y ésa es la lección más importante que corre como un hilo por las páginas de este libro.

Enero de 2014

Obreros textiles en Egipto

Viene de la portada

dores en Egipto, el sueldo está compuesto del salario regular y un sistema de bonos. Estos últimos son frecuentemente y a veces nunca se pagan.

Los trabajadores en Mahalla rechazaron la decisión del gobierno de pagar los bonos atrasados después del segundo día de la huelga porque el gobierno no abordó la demanda de un aumento al salario mínimo.

“Hace un mes formamos el Sindicato Libre de los Trabajadores Textiles de Mahalla para ayudar a esta lucha. Nuestro nuevo sindicato participa activamente en estas movilizaciones”, dijo Kamal Fayoumy, dirigente de los obreros textiles de Mahalla, en una entrevista telefónica el 14 de febrero.

“También exigimos la destitución del director de la compañía Fouad Abdel-Alim, el establecimiento de una junta administrativa de la compañía, la inversión de fondos para adquirir algodón y el pago del salario mínimo a los trabajadores de Mahalla en otras fabricas textiles y a otros trabajadores también”, dijo.

Los obreros textiles de Mahalla exi-

gen que se implemente inmediatamente un nuevo salario mínimo de 1 200 libras egipcias (170 dólares) que el gobierno prometió entraría en vigor a principios de este año para ciertos trabajadores públicos, y que se aplique a todos los trabajadores contratados por el gobierno y las empresas que el gobierno administra. El gobierno es propietario de muchas fábricas, como las de la industria textil.

Desde que los trabajadores en Mahalla empezaron su huelga, los trabajadores en Zefteh Textile, Tanta Spinning y otras empresas se han sumado al paro.

Los trabajadores textiles de Mahalla han estado a la vanguardia de la lucha por un salario mínimo más alto por muchos años. Presentaron esta demanda inicialmente en las masivas protestas contra el presidente Hosni Mubarak en 2008. Las manifestaciones se extendieron por todo el país en 2011 y derrumbaron al odiado dictador.

Los gobernantes egipcios están aumentando la presión contra la clase trabajadora dada una crisis económica aguda. Según los trabajadores de Mahalla



Los trabajadores textiles en Mahalla, han estado al frente de las luchas obreras en Egipto. Arriba protesta en Mahalla en 2008 que exigía la dimisión del entonces presidente Hosni Mubarak y alza del salario mínimo.

que el *Militante* entrevistó durante una visita a Egipto el mes pasado, la fábrica está operando a un nivel reducido y las cesantías han sido frecuentes.

“La demanda de fondos para comprar algodón también es un punto central para nosotros”, dijo Fayoumy en la entrevista reciente. “En este momento la producción en la planta bajó a un 40 por ciento de su capacidad por la falta de algodón. Queremos subir la producción

de nuevo a un 100 por ciento y las compañías deben adquirir el algodón que se necesita.

“No queremos una huelga prolongada. Queremos regresar al trabajo y que todas las máquinas funcionen, pero es necesario que se cumplan las demandas de los trabajadores”.

Georges Mehrabian contribuyó a este artículo.

Movilizaciones populares derrocan al gobierno de Ucrania

Viene de la portada

sobre Ucrania.

Siguiendo el consejo de Putin, Yanukóvich movilizó la policía antidisturbios de Berkut el 18 de febrero para expulsar a miles de manifestantes de la Plaza de la Independencia, conocida como el Maidan, cuando los manifestantes se apoderaron de algunos edificios del gobierno en Lviv.

Los destacamentos de escuadrones antimotines fueron capaces de penetrar hasta el fondo de la plaza antes de que fueran detenidos por las gigantescas barricadas a las que los manifestantes prendieron fuego. Alrededor de 28 personas murieron en los enfrentamientos, entre ellas 10 policías.

Los policías abrieron fuego contra los manifestantes el 20 de febrero y mataron a más de 60. El derramamiento de sangre enfureció a los manifestantes y minó la voluntad de las fuerzas del régimen. Las tropas de Berkut comenzaron a romper filas y a salir de la plaza.

Mientras que se desarrollaban los acontecimientos, muchos capitalistas ucranianos rompieron con Yanukóvich y le instaron a hacer concesiones.

El 21 de febrero Yanukóvich accedió a reunirse con representantes de Rusia, Francia, Alemania y Polonia, junto con los líderes de los tres principales partidos de la oposición burguesa: Patria, el partido gobernante antes de que Yanukóvich fuera elegido en 2010; Punch, dirigida por el ex campeón mundial de boxeo

Vitali Klitschko; y Svoboda, un partido de derecha. Yanukóvich aceptó ceder algunos poderes y establecer una nueva elección para diciembre.

Cuando los líderes de la oposición presentaron el acuerdo a la plaza, se encontraron con abucheos y rebelión. Volodymyr Parasiuk, un capitán de una de las unidades de defensa que controlaban la plaza, tomó el micrófono y denunció la oposición por “darle la mano a este asesino”.

“Nosotros la gente común estamos diciendo esto a los políticos que están detrás de nosotros: ‘Ningún Yanukóvich va a ser el presidente por un año entero’”, dijo a una rugiente multitud Parasiuk, quien había dicho a la prensa que no es miembro de ningún partido. “Mañana, antes de las 10:00, tiene que irse”.

Políticos de la oposición abandonaron la tarima. Klitschko después regresó y trató de disculparse.

Yanukóvich huyó esa noche. Fuerzas organizadas del Maidan se desplegaron fuera de la plaza. Establecieron guardias en oficinas del gobierno.

Trabajadores pagan por crisis capitalista

Viene de la portada

El promedio del salario real neto de los trabajadores hoy es menos que el nivel a mediados de los años 70, y está tendencia hacia la reducción de los salarios se ha acelerado en los últimos cinco años. Desde que la recesión terminó en junio de 2009, los salarios promedio reales de los trabajadores de automóviles ha disminuido un 10 por ciento; para todos los trabajadores del sector manufacturero han caído un 2.4 por ciento.

Los patrones han logrado implementar contratos de dos niveles, como los contratos vigentes en las plantas automotrices y cada vez más en otras fábricas, donde los trabajadores más recientes hacen el mismo trabajo que los trabajadores con más antigüedad, pero a la mitad del salario.

Un número creciente de trabajadores se ve forzado a trabajar con contratos temporales con salarios más bajos y sin beneficios, o trabajar a tiempo parcial. Desde 2009, el número de los que tra-

bajan mediante agencias temporales se ha duplicado a un récord de unos 2.7 millones.

Desde los años 70 la campaña de “productividad” de los patrones —de forzar a los trabajadores a trabajar más duro a costa de la vida y la integridad física— ha aumentado anualmente, pero no los salarios de los trabajadores.

En 1973, los salarios de los trabajadores como porcentaje del producto interno bruto fueron un 66 por ciento. Para 2012, había caído al 58 por ciento, la cifra más baja desde la Segunda Guerra Mundial.

A mediados de los años 70 los “salarios reales se estancaron repentinamente frente a la creciente productividad”, escribió el analista de inversiones John Mauldin en su boletín el 9 de febrero.

Mientras que es difícil para los trabajadores con empleos obtener un verdadero aumento de salario —o un aumento que no sirva debido a primas de salud más altas— a los desempleados les está

resultando más difícil encontrar trabajo.

“Más de uno de cada seis hombres entre 25 y 54 años de edad, años de máximo rendimiento, no tienen trabajo”, reportó el *Journal*, “un total de 10.4 millones”. Más de dos tercios de ellos son considerados “desanimados” por el gobierno, y no los cuentan como desempleados.

El número de trabajadores varones de 25 a 54 años sin trabajo era del 6 por ciento a principios de los años 70, del 13 por ciento a finales de 2007 y del 17 por ciento a finales de 2013.

Según el Buró de Estadísticas Laborales, en 2012, 3.6 millones de trabajadores ganaban el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora o menos. Dado el valor del dólar en 2013, el salario mínimo actual tiene un valor que es un tercio menos de lo que era en 1968.

Si el salario mínimo hubiera subido al mismo ritmo que el aumento de la productividad que los patrones realizaron a costo de los trabajadores, hoy sería 18.28 dólares por hora.

Libros en especial con una suscripción al Militante



Vea lista completa y precios en la página 3